

C.A. de Santiago

Santiago, siete de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece don Rodrigo Andrés Núñez Barría, en representación de **Gestora La Avanzada S.A.**, sociedad de administración de fondos de inversión privados y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19.913, deduce reclamo de ilegalidad respecto de la Resolución Exenta D.J. N° 117-144-2023, de 15 de junio de 2023, de la Unidad de Análisis Financiero, mediante la cual se le impuso una sanción de amonestación por escrito y multa a beneficio fiscal de 30 Unidades de Fomento.

Expresa que mediante Resolución Exenta D.J. N°116-222-2022, de 26 de octubre de 2022, la Unidad de Análisis Financiero inició un procedimiento sancionatorio, formulándole los siguientes cargos:

1.- Incumplimiento a lo dispuesto en la Circular UAF N°57, artículo segundo, numerando 2°, letra d), en relación a la obligación de establecer un procedimiento que establezca la forma de revisar y verificar la información declarada por el cliente persona jurídica o estructura jurídica, respecto de sus beneficiarios finales;

2.- Incumplimiento a las Circulares UAF N°49, de 2012, especialmente, a lo dispuesto en el Título IV, letra a), complementado con lo indicado en el artículo segundo, numerando 2°, letra f), de la Circular 57, de 2017, en relación a la obligación de implementar y ejecutar medidas de debida diligencia que tengan por fin identificar y conocer adecuadamente a clientes, posibles clientes o beneficiarios finales de una operación que puedan ser calificados como Persona Políticamente Expuesta (PEP);

3.- Incumplimiento a las obligaciones contenidas en la Circular UAF N°60, relativo a monitorear y revisar permanentemente a sus clientes en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas masivas.

Sostiene que su representada ejerce la función de Administradora de La Avanzada Fondo de Inversión Privado, cuya política de inversión consiste en la compra de carteras de cobranza de larga data,



de personas naturales con entidades bancarias o casas comerciales. Al respecto, afirma que se tiene poca información de los deudores, quienes no deben ser considerados clientes.

Refiriéndose a los cargos formulados, argumenta que ha implementado medidas preventivas de conocimiento de los deudores, pero atendida la escasa información que mantiene de estos, logra un bajo porcentaje de éxito. Además, agrega que la obligación de implementación de procedimientos de verificación de las declaraciones de los clientes, dice relación con personas jurídicas y quienes componen su cartera son personas naturales, por lo que falta un requisito para que esta obligación le sea exigible.

En cuanto a la tercera infracción, indica que el Oficial de Cumplimiento ha actualizado los registros y la infracción fue subsanada.

Por otro lado, estima que la sanción pecuniaria aplicada no es proporcional con otros casos similares.

Concluye señalando que la resolución que impuso las sanciones carece de legalidad, atendido que se dictó fuera del plazo de diez días contados desde la última diligencia ordenada en el expediente, por lo que solicita se dejen sin efecto las sanciones o en su defecto, se aplique únicamente una amonestación.

Don Carlos Pavéz Tolosa, director de la Unidad de Análisis Financiero, solicita el rechazo de la reclamación, con costas.

Expone los antecedentes del procedimiento administrativo que concluyó con la constatación de las infracciones y la aplicación de las sanciones a la reclamante.

Efectúa una exposición de los motivos por los que requiere sea desestimada la reclamación interpuesta. Explica que, conforme se resolvió en la resolución de término, la antigüedad de las deudas y la desactualización de datos, es un nivel de exposición que acepta el reclamante, sin que sea oponible a la Unidad de Análisis Financiero, lo que no podría servir de justificación suficiente para eximir del cumplimiento de las obligaciones conforme a la Ley 19.913 y las circulares complementarias.



Afirma que el gestor adquiere la posición de acreedor, por lo que el deudor original es cliente del reclamante, con independencia que esa cesión se efectúe respecto de dos o más créditos y en una misma cartera de clientes.

Precisa que las alegaciones planteadas fueron ya invocadas en la sede administrativa, siendo descartadas. Agrega que el reclamo de ilegalidad es inconsistente, pues el cargo dice relación con la ausencia de un procedimiento que organice la forma en que la empresa revisa y verifica la información de los beneficiarios finales, y permita hacer un cotejo con fuentes abiertas o privadas.

En relación a la segunda infracción, indica que la compañía no acreditó gestiones para la identificación como persona políticamente expuesta de los clientes deudores en el transcurso del procedimiento sancionatorio y tampoco aportó antecedentes en dicho sentido.

Sobre la tercera infracción, referida a monitorear y revisar permanentemente a sus clientes en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, argumenta que existe un reconocimiento expreso de parte del sujeto obligado y que las obligaciones emanadas en este sentido para el reclamante son de cumplimiento continuo y permanente en la medida que la empresa tenga la calidad de sujeto obligado.

Pronunciándose sobre la alegación de falta de proporcionalidad, sostiene que las infracciones cometidas lleva atribuidas una multa de hasta 800 Unidades de Fomento y que en este caso se le sancionó a 30 Unidades de Fomento. Además, precisa que durante el período 2020, se aplicó a otros obligados finales, sanciones de amonestación, sin multa, teniendo en consideración la situación excepcional producida por la pandemia, lo que generó distorsiones en la economía por dos años.

Finalmente, en relación al plazo alegado por la reclamante para proceder a la dictación de la resolución, advierte que la ley no dispone una sanción por el incumplimiento, y el proceso fue sustanciado entre octubre de 2022 a junio de 2023, es decir un plazo inferior a ocho meses.



Se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente el reclamo para su vista el día 08 del actual, compareciendo a estrados ambas partes, debidamente representados por sus abogados.

Considerando:

1º.- El presente arbitrio se encuentra contemplado en el artículo 24 de la Ley N° 19.913, el que dispone *“Los afectados por resoluciones de la Unidad que se originen en el procedimiento sancionatorio reglado en esta ley, que estimen que éstas no se ajustan a derecho, podrán deducir reclamo en contra de las mismas, dentro del plazo de diez días, contado desde la notificación del acto, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del sancionado”*.

2º.- El objeto del presente reclamo de ilegalidad dice relación con la impugnación de la Resolución Exenta D.J. N°117-144-2023 de fecha 15 de junio del año 2023, que sanciona al sujeto obligado, Gestora la Avanzada S.A., con amonestación por escrito y una multa en beneficio fiscal de 30 Unidades de Fomento, en razón a haberse verificado los siguientes incumplimientos:

a) No revisar y verificar la información declarada por el cliente persona jurídica o estructura jurídica respecto de sus beneficiarios finales;

b) No implementar ni ejecutar medidas de debida diligencia que tengan por fin identificar si un cliente persona jurídica o estructura jurídica declarada como beneficiarios finales de una operación pueda ser calificados como Persona Políticamente Expuesta;

c) No monitorear ni revisar permanentemente a sus clientes en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas masivas.

3º.- Lo anterior es el resultado del procedimiento administrativo llevado a efecto por la Unidad de Análisis Financiero, durante el cual se dictó la Resolución Exenta D.J. N°116-222-2022, de fecha 26 de octubre de 2022, que formulo tres cargos al sujeto obligado Gestora la Avanzada S.A., cargos que se describen en lo expositivo de esta



sentencia y, que responden al incumplimiento a lo dispuesto en la la Circular UAF N°57, Circular UAF N°49 y, Circular UAF N°60.

4°.- De la lectura del reclamo se desprende, respecto de los dos primeros cargos, que se encuentra en entredicho la calidad de “cliente”, de los deudores de la cartera cedida, en tanto se argumenta por la sociedad Obligada, que adquirió de un tercero la cartera de los gestores cedidos, no detentando estos la calidad de clientes a su respecto y, por otra parte somete a consideración la dificultad de la obtención de sus antecedentes y, de serlo son menores y, por último, respecto del tercer cargo, que subsano inmediatamente el incumplimiento que se detalla en la resolución.

5°.- Cobra importancia tener presente que la creación de la Unidad de Análisis Financiero tiene por propósito la instauración de un servicio destinado a prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de la actividad económica desarrollada en el país, para la comisión de determinados delitos ligados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para la consecución de tal propósito realiza labores de inteligencia financiera a la vez que también emite normativa y fiscaliza el cumplimiento de la misma, aplicando sanciones de índole administrativa en caso de inobservancia por los administrados.

6°.- Es así que la normativa contempla la posibilidad de que la Unidad de Análisis Financiero imparta instrucciones de aplicación general a las personas naturales y jurídica señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913 con el propósito de alcanzar el adecuado cumplimiento del deber de informar, pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución, acorde con lo dispuesto en la letra f) del artículo 2° del mismo texto legal.

7°.- Como se ha dicho, la discusión principal en el caso en estudio, es la identificación del cliente real para el cumplimiento de los fines para los que fue establecida la legislación nacional en materia de lavado y blanqueo de activos, más allá de la existencia de figuras que puedan resultar útiles para fines comerciales y, si bien la reclamante, compro una cartera de deudores morosos, a diferencia de lo que sostiene, sí tiene el deber de informar la identificación del verdadero cliente, única forma de dar sentido al artículo 3 de la Ley 19.913;



disposición que define a todas las personas naturales y jurídicas reguladas por dicha ley como sujetos obligados e indica que, entre ellas, se encuentran aquellas emanadas de las circulares dictadas por la UAF.

En efecto, en el caso, la empresa adquiere carteras de deudores y hace gestiones para obtener parte de dicha deuda, por lo que no pueden mirarse como clientes cedidos, por el contrario éstos tienen una relación directa con la gestora, en tanto les hace una oferta, ingresando dinero a la sociedad; en definitiva, de lo que se trata o se persigue, es conocer las personas que interactúan en el mercado en el contexto del origen de fondos.

Añadir, que la reclamante cuenta con la oportunidad de recabar antecedentes de los clientes deudores, puesto que debe buscar la forma de contactarlos a fin de lograr la solución de la deuda.

8°.- Luego, en relación al cargo tres (3), si bien se reconoce como efectivo dicho incumplimiento, la pretensión de dejarla sin efecto, al haberse adoptado, posterior a la época de la fiscalización medidas tendientes a corregir las deficiencias observadas, tanto respecto de este cargo, como los restantes, no resulta plausible, puesto que un cumplimiento tardío no lo exime de su responsabilidad administrativa, sin perjuicio como lo consigna la Resolución Exenta D.J. N°117-144-2023 tal circunstancia fue considerada como una aminorante al momento de establecer la sanción.

9°.- En cuanto a la proporcionalidad de la sanción. Lo razonado permite sostener que la reclamante incurrió en la infracción del artículo 2° letra f) de la Ley N° 19.913, infracción leve que conforme lo establece el artículo 20 N° 1 debe ser sancionada con amonestación y una multa de hasta 800 Unidades de Fomento, por lo que la sanción de 30 Unidades de Fomento aplicada a la recurrente está dentro del rango legal, razón por la que la sanción impuesta está acorde a la contravención cometida; de manera que la circunstancia atenuante a que se hizo referencia en el motivo anterior, ha recibido adecuada aplicación y, además, por ende, se descarta una falta de proporcionalidad en comparación con otros casos citados en el recurso.



10°.- Finalmente, el sujeto obligado argumenta el incumplimiento a lo previsto en el numeral 7 del artículo 22 de la Ley 19.913, que prescribe “La resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio será fundada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente, pronunciándose sobre cada una de las alegaciones y defensas del supuesto infractor, y contendrá la declaración de la sanción que le imponga o su absolución. Esta resolución deberá dictarse dentro de los diez días siguientes a aquél en que se haya evacuado la última diligencia ordenada en el Expediente”; plazo que no se cumplió, por lo que en concepto del reclamante, conlleva una infracción a los plazos legales establecidos en la Ley N° 19.913, por lo que, resolución exenta impugnada carecería de legalidad.

A este respecto, se debe señalar, tal como lo refiere la UAF, que el plazo de 10 días, no tiene una sanción asociada, constituye un plazo que no resulta fatal y busca dar un impulso y organización a la gestión de la administración, el cual se desarrolló en un plazo menor a 8 meses; no existe fundamento normativo para fundar una ilegalidad en cuestiones de plazo.

11°.- En estas condiciones, resulta improcedente dejar sin efecto la multa y amonestación impuesta, toda vez, que la reclamante debió cumplir con los deberes de requerimiento de información y registro; implementar las medidas de debida diligencia que se explicitan en la Circular N°49, 57 y 60 de la UAF; y la obligación de contar con procedimientos de verificación de las relaciones que los clientes del respectivo sujeto obligado puedan tener con los talibanes o la organización Al Qaeda y mantener registro de dichas revisiones; de modo que la resolución que impone la sanción es legal.

12°.- En consecuencia, es posible advertir que la resolución que se impugna ha cumplido, de un modo objetivo y preciso, con las exigencias que le impone el citado artículo 22° de la Ley N° 19.913, pues ha señalado con precisión los cargos y los hechos en que se funda; la fecha en que se verificaron, la norma eventualmente infringida y la sanción asignada, no advirtiéndose en consecuencia una contravención a la ley.

Por estas consideraciones, citas legales efectuadas y lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 19.913, **se rechaza** el recurso de



reclamación interpuesto por la empresa **Gestora La Avanzada S.A.**, en contra de la la Resolución Exenta D.J. N° 117-144-2023, de 15 de junio de 2023, dictada por la Unidad de Análisis Financiero.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelaré.

Redacción de la ministro Sra. Elsa Barrientos Guerrero.

Rol N° 525-2023 (Ilegalidad).-

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, además, la ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y la abogado integrante señora Magaly Correa Farías. No firma la abogada integrante señora Correa, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Rivera M., Elsa Barrientos G. Santiago, siete de diciembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a siete de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

